



**SENTENCIA**

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTES</b>	Coodetrabe
<b>DEMANDADO</b>	Cesar Augusto Trujillo Villa
<b>RADICADO</b>	05-001-31-05-016-2018-00633
<b>TEMA</b>	Perjuicios, incumplimiento de contrato
<b>DECISIÓN</b>	Confirma sentencia

El ocho (8) de julio de dos mil veintidós (2022), el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, integrada por los magistrados **HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ, CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA** y **GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**, quien actúa como ponente, previa deliberación del asunto, según consta en el **ACTA 163** de discusión de proyectos, procede a dictar sentencia de segunda instancia dentro del proceso ordinario promovido por la **COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BETULIA -COODETRABE-** contra **CESAR AUGUSTO TRUJILLO VILLA**, con radicado 05-001-31-05-016-2018-00663.

• **PRETENSIONES:**

La cooperativa demandante aspira se declare que con el demandado *“hubo un contrato de prestación de servicios profesionales, cuya gestión consistió en atender a nombre de la cooperativa, el proceso contencioso administrativo que se rituó ante el juzgado 14 administrativo y tribunal Administrativo de Antioquia, donde curso proceso de reparación directa en contra del Municipio de Betulia, el señor Otoniel de Jesús Hernández Correa y la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE BETULIA COODETRABE. Que se declare el incumplimiento del contrato de prestación de servicios profesionales de naturaleza civil, por parte del señor CESAR AUGUSTO TRUJILLO VILLA,, y en consecuencia, RESUELTO Que se condene al señor Cesar Augusto Trujillo Villa, por concepto de indemnización por el incumplimiento del contrato de prestación de servicios de naturaleza civil celebrado con la Cooperativa de Transportadores de BETULIA COODETRABE, y a favor de esta última, las siguientes sumas de dinero: La suma de mil millones de pesos (\$1000’000.000), correspondiente a la sentencia en contra de mi prohijada”*

• **HECHOS**

Las anteriores pretensiones se sustentan en los hechos siguientes, los cuales se transcriben de forma textual, incluidos posibles errores:

(...)

1. *La Cooperativa de Transportadores de Betulia, es una entidad sin animo de lucro que presta el servicio de Transporte en en municipio de Betuia Antioquia, asociacion legalmente constituida mediante documento privado del pasado y debidamente inscrita en Camara de Comercio la Superintendencia de Economia Solidaria*
2. *Como ente coopertivo que es, a ella se encuentran afiliados los miembros en calidad de cooperados, quienes con sus vehiculos prestan el servicio de transporte en la localidad*
3. *El servicio que presta la cooperativa con los vehiculos de sus asociados, tiene un alto valor social, pues el municipio de Betulia es una comunidad lejada y mis mandantes es la unica empresa que presta el servicio en la localidad*
4. *Es asi como en ejercicio de tal actividad, el pasado domingo 3 de abril de 2011, a las 2 pm., un vehiculo ascrito a la cooperativa, tipo escalera, de placas TAG 885 de propiedad del señor Otoniel de Jesus Hernandez Correa, en momentos que transitaba por el casco urbano, perdio los frenos cuando descencia por una calle y fue a parar contra una casa, causanto lesion a 34 personas y muerte a dos*
5. *Por en tales hechos, se propuso demanda contenciosa administrativa en contra del municipio de Betulia, del propietario el Vehiculo y de la cooperativa que represento*
6. *La cooerativa para los efectos, contrato los servicios profesionales del Dr Cesar Auguto Trujillo Villa, identificado con cedula numero 71'612.248 a fin de que representara los derechos e intereses de la cooperativa*
7. *El profesional del derecho, tal como consta en el fallo de ambas instancias, respondio por fuera de terminos, es decir, no contesto oportunamente el libelo, dejando sin posibilidad de demostrar la ausencia de responsabilidad de la cooperativa, como tampoco hizo uso de los alegatos de conclusion ni mucho menos refuto la prueba pericial con la que finalmente se condeno a mi representada; es decir, el doctor Trujillo fue negligente en el cumplimiento del mandato judicial, lo que a la postre se tradujo en que nuestra cooperativa fuera sentenciado a pagar de maenra solidaria, gruesas sumas de dinero (ver fallos del Juzgado 14 administrativo del Circuito y la Sala Primera de Descogestion del Tribunal Administrativo que se anexan), por el orden de los mil millones*
8. *Con tan gruesas sumas para cubrir debido a la negliencia del togado, nuestra empresa se ve ad portas de ser liquidada, generando con ello un muy serio perjuicio a la comunidad de Betulia*
9. *La condicion de ser abogado, amerita que el aquí demandado colega, debia ser probo, idoneo en la gestion contratada por mis mandantes, maxime si tiene cierto grado de esperticia*
10. *Entre las partes, es decir, entre el Doctor Trujilo y la cooperativa no medio contrato de prestacion de servicios donde se pactara un regimen de responsabilidad diferente al supletorio de la ley, por lo que habra que remitirnos a aquella a fin de establecer el grado de responsabilidad del aquí demandado.*

(...)

- **CONTESTACIÓN:**

Se dio por no contestada la demanda.

- **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:**

El 3 de mayo de 2021 Juzgado Decimosexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió al demandado de la totalidad de las súplicas de la demanda. Sustentó su decisión en que la justicia ordinaria en su especialidad laboral sí es la competente para conocer del asunto y que la demandada no demostró el nexo de causalidad entre el daño y la culpa. Las costas procesales quedaron a cargo de la demandante.

- **APELACIÓN:**

La decisión de instancia fue recurrida en apelación por la cooperativa demandante, quien a través de su mandatario judicial la sustentó en los siguientes términos: que no comparte la sentencia, pues considera contradictoria su parte motiva con la resolutive, debido a que quedó demostrado el contrato de mandato, así fue aceptado por el demandado en su interrogatorio de parte. Señala que no era necesario adjuntar todo el expediente para deducir la responsabilidad, ya que de la mera lectura de la sentencia condenatoria de primera y segunda instancia se hizo un resumen de la actuación procesal desarrollada y se hizo alusión a la falta de actividad del hoy demandado. Con este solo criterio es suficiente para aducir la responsabilidad. Insistió sobre la incongruencia del fallo, toda vez que al demandado aceptar el mandato hablaría mal si se considerare que los términos estaban vencidos. Se debe entonces aceptar la tesis del incumplimiento de sus obligaciones contractuales. Al no contestarse la demanda quedó la cooperativa huérfana de toda posibilidad de defensa.

- **ALEGATOS:**

Las partes no presentaron alegatos.

### **C O N S I D E R A C I O N E S:**

Atendiendo a la apelación formulada por la cooperativa demandante, el problema jurídico para resolver por esta Sala se centrará en determinar si se encuentra acreditada la responsabilidad del demandado Cesar Augusto Trujillo Villa en el fallo condenatorio en contra de la primera dentro del proceso

con radicado 05001-33-31-004-2012-00073 y si hay lugar o no al pago de perjuicios derivados de la responsabilidad civil contractual.

No es motivo de discusión por las partes que la justicia ordinaria en su especialidad laboral es la competente para conocer del asunto.

Pues bien, Coodetrabe contrató los servicios profesionales del doctor Trujillo Villa con el fin de que defendiera los intereses de la cooperativa dentro del proceso con radicado 05001-33-31-004-2012-00073, en el que fueran demandados dicha entidad, el municipio de Betulia y el señor Otoniel de Jesús Hernández Correa. Advirtió que con el demandado no se celebró contrato por prestación de servicios profesionales. Que a través de sentencia del 19 de diciembre de 2014 el Juzgado Decimocuarto Administrativo del Circuito de Medellín condenó solidariamente responsables a Coodetrabe y al señor Otoniel de Jesús Hernández Correa al pago de los perjuicios morales y materiales en favor de los demandantes. Esta decisión fue confirmada y modificada mediante sentencia del 16 de diciembre de 2015 proferida por la Sala Primera de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia.

Para resolver el problema jurídico planteado, es necesario hacer alusión a los elementos que deben concurrir para declarar la existencia de una responsabilidad por perjuicios. Al respecto, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC282-2021, indicó: *“En materia de responsabilidad civil contractual o extracontractual, las reglas de la carga de prueba imponen al demandante, salvo excepciones legales o convencionales, o de una eventual flexibilización, **demostrar los elementos constitutivos de la misma - hecho, factor de atribución, daño y nexos causal-**, laborío que no puede ser sustituido por el fallador a través de pruebas oficiosas, pues se convertiría en un juez-parte”*

Señaló la cooperativa que el fallo condenatorio en su contra se debió a la falta de contestación oportuna de la demanda por parte de su mandatario judicial, por lo que considera que por este hecho se derivan los perjuicios reclamados.

Atendiendo a los principios que conforman la carga de la prueba, según lo señalado en el artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; asimismo, de conformidad con lo regulado en el artículo 164 de la misma codificación, toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. Los postulados

anteriores aplicados a este proceso significan que la cooperativa demandante estaba en la obligación de mostrar el nexo de causalidad entre el daño ocasionado por la falta de contestación de la demanda y la culpa del mandatario judicial.

Igualmente, como se adoctrinó en sentencia SL2049-2018, reiterada en la SL1469-2021, la formación del libre convencimiento y el principio de la sana crítica implica que el juez debe fundar su decisión en aquellos elementos probatorios que le merecen mayor persuasión o credibilidad, que le permiten hallar la verdad real, siempre y cuando las inferencias sean lógicas y razonables.

Descendiendo al caso concreto, no se encuentran acreditados los elementos para declarar la pretendida responsabilidad por perjuicios, conforme se pasa a exponer.

Entre Coodetrabe y el abogado Trujillo Villa no se suscribió contrato de prestación de servicios; sin embargo, este último confesó haber actuado en el proceso.

Como prueba documental relacionadas con el proceso llevado a cabo en los juzgados de lo contencioso administrativo, las únicas piezas aportadas por la demandante son las sentencias de primera y segunda instancia; no obstante, de estas no se puede inferir cuándo se le otorgó poder especial al abogado, cuándo se le puso en conocimiento la existencia del proceso y qué material probatorio se le puso de conocimiento.

Tampoco se demostró por la parte actora que la sentencia condenatoria obedeció únicamente a que la demanda se dio por no contestada, toda vez que, si bien esta pasividad genera consecuencias adversas a la parte opositora, no puede afirmarse que fue debido a tal conducta que se impuso las condenas por perjuicios morales y materiales, ya que, de la lectura de las sentencias, si bien se refiere a la falta de respuesta de la demanda, también se evidencia que fue probado la negligencia en lo que respecta al mantenimiento mecánico del automotor que ocasionó el accidente. Nótese que la condena fue solidaria entre Coodetrabe y Otoniel de Jesús Hernández Correa. Este último sí dio contestación oportuna de la demanda, oponiéndose a la totalidad de las pretensiones, además de proponer excepciones, hecho que, como condenado solidariamente benefició los intereses de la cooperativa en el trámite del proceso.

No se puede desconocer que con las sentencias del 19 de diciembre de 2014 y 16 de diciembre de 2015 se impuso una condena cuantiosa y solidaria; sin embargo, la cooperativa reclama el pago de perjuicios por valor de \$1.000'000.000 sin demostrar y especificar de dónde proviene tan alto valor, toda vez que, se repite, al ser la condena solidaria, no se evidencia en el expediente que la condena hubiere sido pagada, que fue la parte demandante quien la cubrió en su totalidad y cuánto fue la suma que pagó por ella. Mal podría la cooperativa reclamar estos perjuicios sin ser la entidad que pagó las sumas objeto de condena.

La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia señaló que en la teoría de la responsabilidad civil a pesar de la conducta negligente no se demostró un daño, ello no da lugar a reclamarlo. Así se pronunció en sentencia en sentencia SC20448-2017:

(...)

*En la teoría de la responsabilidad civil si bien se impone al victimario, por regla general, la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte, injustificada y dañinamente, la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente, no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en la materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta.*

*De tal modo, que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesarias su presencia y su justificación, para que se abra paso la indemnización de perjuicios.*

*2.1 Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma; lo cual ocurre cuando no haya duda de su concreta realización. Además, es el requisito “más importante (...), al punto que, sin su ocurrencia y demostración, no hay lugar a reparación alguna” (CSJ, SC del 1º de noviembre de 2013, Rad. n.º 1994- 26630-01; CSJ, SC del 17 de noviembre de 2016, Rad. n.º 2000-00196-01).*

*Para que sea “susceptible de reparación, debe ser ‘directo y cierto’ y no meramente ‘eventual o hipotético’, esto es, que se presente como consecuencia de la ‘culpa’ y que aparezca ‘real y efectivamente causado’” (CSJ, SC del 27 de marzo de 2003, Rad. n.º 6879).*

*La condición de ser directo reclama, en la responsabilidad contractual, que él sea la consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades, o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende.*

(...)

De todo lo anterior se desprende que, con la sola lectura de las sentencias proferidas por el Juzgado Decimocuarto Administrativo del Circuito de Medellín y la Sala Primera de Descongestión del Tribunal Administrativo de Antioquia

no se encuentra demostrado el perjuicio reclamado, al no probarse sus elementos. El daño, esto es, la condena en contra de la cooperativa solo se demostró parcialmente, ya que, únicamente se aportó las referidas sentencias condenatorias; sin embargo, brilla por su ausencia la prueba que dé cuenta que tal entidad pagó las condenas y que ello le ocasionó un perjuicio el cual reclama en el presente litigio; la culpa tampoco se encuentra demostrada, pues no hay evidencia que la contestación extemporánea obedeció a negligencia imputable al abogado Trujillo Villa, al no aportarse medios demostrativos que permitan inferir la fecha en que se le puso en conocimiento a este último de la existencia del proceso; finalmente, tampoco se encuentra configurado el nexo de causalidad entre el daño y la culpa, toda vez que, como ya se dijo, no hay prueba que por el solo hecho de darse por no contestada la demanda la sentencia fuere condenatoria.

Corolario de todo lo dicho, al no demostrarse la causación de perjuicios, la sentencia absolutoria merece ser **CONFIRMADA**.

Las costas procesales de la primera instancia quedan como lo dijo el juzgado del conocimiento. Las de la segunda instancia, atendiendo a lo establecido en el numeral 1° del artículo 365 del Código General del Proceso y por no salir avante la apelación formulada por la cooperativa demandante, son de su cargo y en favor del demandado. De conformidad con lo establecido en el acuerdo PSAA16-10554 del 5 de agosto de 2016 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, como agencias en derecho en esta instancia se fija la suma de \$1.000.000.

Por lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

**RESUELVE:**

Se **CONFIRMA** la sentencia absolutoria que se revisa por vía de apelación, de fecha y procedencia mencionada.

Las costas procesales y agencias en derecho quedan como se dijo en la motivación de esta providencia.

Se notifica lo resuelto por **EDICTO**. De no ser susceptible del recurso extraordinario de casación se ordena devolver el expediente al juzgado de origen.

Los Magistrados,



**GUILLERMO CARDONA MARTÍNEZ**



**CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA**



**HUGO ALEXÁNDER BEDOYA DÍAZ**





**SECRETARÍA SALA LABORAL**

**EDICTO VIRTUAL**

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la sentencia que a continuación se relaciona:

<b>PROCESO</b>	Ordinario
<b>DEMANDANTES</b>	Coodetrabe
<b>DEMANDADOS</b>	Cesar Augusto Trujillo Villa
<b>DECISIÓN</b>	Confirma sentencia
<b>MAGISTRADO PONENTE</b>	Guillermo Cardona Martínez

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/131> por el término de un (01) día hábil. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

**CONSTANCIA DE FIJACIÓN**

Fijado el 11 de julio de 2022 a las 8:00am

**CONSTANCIA DE DESFIJACIÓN**

Se desfija el 11 de julio de 2022 a la 5:00pm

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
SECRETARIO